

# **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.**

**SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO**

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA**

**COMISIÓN PERMANENTE DEL**

**H. CONGRESO DE LA UNIÓN**

El suscrito, Senador **FROILÁN ESQUINCA CANO**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES**, al tenor de la siguiente:

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Desde 1981 México es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconociendo la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. En el artículo 11 del PIDESC se hace alusión al derecho a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia; a su vez, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha reconocido que el derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas.

En armonía con el PIDESC y con la Observación General N°15 sobre el mismo, el derecho humano al agua se ha establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con esta disposición constitucional, toda persona en México tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar dicho derecho, apoyándose en la participación de la Federación, los estados, los municipios y la ciudadanía para poder alcanzar el acceso y el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos con los que cuenta nuestro país; impulsar el acceso y la plena disposición del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, potable y salubre a fin de no poner en riesgo la salud y supervivencia, en condiciones de igualdad y no discriminación; así como, garantizar la protección de los recursos naturales, el acceso al agua potable, el saneamiento y los servicios básicos.

En el mismo ordenamiento constitucional, el artículo 27 indica cuáles son las aguas nacionales, mismas que se encuentran reguladas por la Ley de Aguas Federales, bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua. México es un país privilegiado por su riqueza hídrica; en comparación con otros, el agua subterránea y superficial, así como el nivel de precipitación, es aún abundante en amplias extensiones de su territorio. No obstante, se presentan diversos retos vinculados al agua. Por citar algunos ejemplos: la falta de acceso y disponibilidad de agua potable y saneamiento; la prestación deficiente de los servicios públicos, especialmente en los desarrollos urbanos anárquicos e inadecuados; el rezago en la infraestructura básica adaptada al contexto socio-ambiental del país; la contaminación de los cuerpos de agua; la creciente demanda y la distribución inequitativa, entre otros.

Estas problemáticas no sólo repercuten en las capacidades productivas y económicas de la población, sino que impactan directamente sobre la salud de las familias y de los ecosistemas. Además, se ven agravadas por la falta de una gestión integrada del recurso hídrico, la falta de planeación territorial y los efectos del cambio climático que impactan directamente sobre la cantidad y disponibilidad de agua.

Más aún: existen determinados métodos productivos cuyas actividades son especialmente proclives a vulnerar los derechos hídricos y todas las prerrogativas fundamentales relacionadas con ellos, entre las que se destacan las prácticas industriales que usan enormes cantidades de agua para la extracción de carburantes a través del método de fractura hidráulica, provocando efectos negativos sobre las comunidades, la salud, el medio ambiente y el clima. El daño generado y los impactos a corto, mediano y largo plazo son probablemente irreversibles e irreparables por las políticas de regulación existentes; sin mencionar que, más que contribuir en la economía de los países en que se implementa, la perjudican pues los beneficios a corto plazo que proveen son infinitamente inferiores respecto de los impagables costos humanos y ambientales que conlleva, como lamentablemente se ha comprobado cada vez.

Pese a la evidencia existente en Estados Unidos y otros países sobre los impactos negativos e inevitables del uso de fractura hidráulica (fracking) para la extracción de hidrocarburos no convencionales, el gobierno de México sigue promoviendo dicha actividad.

Por ello, es necesario exponer las consecuencias que la práctica de la fractura hidráulica o *Fracking*, pueden llegar a significar para la salud de las personas. Esta técnica consiste en la perforación de un pozo vertical atravesando mantos acuíferos y rocas, para así llegar a capas de esquisto, piedra de la cual se pueden extraer diversos tipos de gases útiles para las actividades humanas.

Dichas perforaciones eventualmente se vuelven horizontales para así poder maximizar su área de contacto; éstas pueden llegar a ser muy profundas, llegando incluso a alcanzar los tres kilómetros. Asimismo, se pueden utilizar explosivos para crear grietas alrededor del orificio creado, con el fin de aprovecharlas para hacer pasar un fluido a una elevada presión (entre 345 y 690 atmósferas), para que después el gas almacenado en las rocas salga expulsado hacia la superficie, siendo capturado en el camino, para así utilizarlo en actividades humanas. El gas obtenido por medio de la fractura hidráulica, es comúnmente conocido como Gas de Esquisto, de lutita o *Gas Shale* y últimamente su extracción se ha extendido a través del mundo. Para 2013, se contabilizaron más de 40,000 productores de gas de esquisto.

Para que se pueda extraer este gas se necesitan altas cantidades de agua, aproximadamente unos 16,000 litros de agua por minuto, la cual, gracias a la alta presión, se filtra lentamente en muchas grietas de la roca natural. El agua, al entrar a tan alta presión libera numerosos componentes de las rocas: no solo gases, sino también metales pesados o incluso materiales radioactivos, que se llevan a la superficie junto con el gas extraído. Dichos materiales pueden filtrarse dentro de los mantos acuíferos una vez que son liberados, derivando en la posible contaminación de éstos y al mismo tiempo poniendo en riesgo tanto a las personas como a los ecosistemas que puedan llegar a consumir el agua que contengan.

Es muy importante tomar acciones para impedir ésta práctica, sobre todo porque México está entre los cinco países con mayores reservas a nivel mundial de Gas Shale lo que lo expone a convertirse en un territorio altamente asediado por el fracking.

Estos pozos, tienen una vida promedio de 7 años, a través de los cuales consumen millones de litros de agua para su fractura. Cuando su vida útil termina, dichos pozos deben ser sellados para evitar futuras contaminaciones a los mantos acuíferos cercanos. Sin embargo está probado que los sellos jamás garantizan su integridad.

Por ende, se considera que la mejor manera de afrontar las consecuencias de ésta práctica es simplemente prohibirla, ya que, por más regulada que se encuentre, ineludiblemente generará gravísimas consecuencias ambientales y sociales imposibles de paliar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se modifica la fracción XI, se adiciona la fracción XII ambas del artículo 6, y se adiciona la fracción XI Bis al artículo 29, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 6.** Compete al Ejecutivo Federal:

**I.-...**

**II.- a X.- (...)**

**XI. Garantizar que por ningún motivo y bajo ninguna denominación se practique la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica.**

**XII. Las demás atribuciones que señale la presente Ley.**

**ARTÍCULO 29.** Los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones, en adición a las demás asentadas en el presente Título:

**I.- a XI.- (...)**

**XI BIS: No realizar por cualquier medio y bajo ninguna denominación la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica.**

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Atentamente,

**SEN. FROILÁN ESQUINCA CANO**

**Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, el día 15 del mes de agosto de 2018.**